

1'433.500 inscritos en plan de Lenín Moreno serán evaluados

INFORMES | Domingo, 23 de abril, 2017 - 00h00



Pablo Medina, de 71 años, dice que aspira a la pensión de \$ 100. Desde hace una década está sin empleo y vive del reciclaje de botellas.

● ● ● ● ●

Unos se han inscrito con la expectativa de volver a recibir el Bono de Desarrollo Humano (BDH). Otros apuntan a tener casa propia o conseguir un crédito para financiar un emprendimiento. Lourdes García, Pablo Medina, Jenifer Soledispa, María Mendoza y Andrés Castro se inscribieron en el plan denominado Toda una vida, del presidente electo, Lenín Moreno.

Se trata del principal programa de Gobierno que incluye la construcción de 325 mil nuevas casas en cuatro años, de las que 191.000 sin costo son para las familias más pobres; la entrega de créditos a los jóvenes; la subida del BDH hasta \$ 150 –según el número de hijos o familiares con discapacidad–; la entrega de una pensión de \$ 100 a los adultos mayores y el cuidado desde la concepción hasta los primeros mil días de vida.

Homero Arellano, exministro de Seguridad en el régimen de Rafael Correa y director del plan Toda una vida, afirmó vía WhatsApp que hasta el 2 de abril pasado se inscribieron 1'433.500 personas: 540.147 en el plan de vivienda; 414.166 para el BDH; 276.201 para el crédito juvenil; 149.733 para la pensión de adultos mayores y 53.253 en la denominada Misión Ternura (cuidado de los niños).

NOTICIAS RELACIONADAS

El agro, una de las deudas por subsanar



Financiamiento es decisivo para la oferta de las 325 mil casas, de Lenín Moreno



Reducción de la pobreza no tuvo mayor impacto en la desnutrición



La expectativa entre los inscritos es alta: "Tengo unos tres años que no recibo el bono (hoy de \$ 50). Me lo quitaron porque me dijeron que ya había salido de la pobreza", dice García, una madre soltera de 32 años y con tres hijos que vive, según asegura, de los \$ 30 a la semana que su exconviviente le pasa de lo que gana como albañil.

Arellano explica que los inscritos son "candidatos en los cinco planes" y que "posteriormente al trabajo que realizaron las brigadas (2.968) en territorio se estableció una primera línea de base, que deberá ser contrastada con la información del Registro Social para establecer la prioridad en atención para los sectores más vulnerables".

El Registro Social es una base de datos en la que constan el nivel socioeconómico y el puntaje de vulnerabilidad de las familias. Esta calificación es la que determina si la familia recibe o no el BDH. El documento titulado 'El Estado del Buen Vivir Bono de Desarrollo Humano', publicado en 2016 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, indica que su entrega es clave para reducir la pobreza.

El número de personas que cobran el BDH ha bajado de 1'335.048 en 2000, a 1'269.742 en 2007. Y se redujo a 1'108.255 en 2015, de los que 535.453 son adultos mayores, 444.150 son jefas de familia y 128.652 tienen alguna discapacidad.

Decio Machado, consultor de políticas públicas, afirma que las ofertas de Moreno han tenido mayor sustento técnico: "Es una propuesta que maneja indicadores concretos... Esto me parece normal porque viene desde el Estado que lleva diez años funcionando con un equipo que ya tiene un engranaje".

Sin embargo, dice Machado, una cosa es que el plan esté bien elaborado y otra es su nivel de cumplimiento. Analistas coinciden en que la situación económica actual sería un obstáculo que dificulte o limite la puesta en práctica de estas promesas de campaña sobre todo en lo que queda del año y el 2018.

En entrevista vía e-mail con este Diario diez días antes de la segunda vuelta, Moreno anotó que el plan Toda una vida requiere de un presupuesto de un poco más de \$ 2 mil millones y un plan de inversiones que alcanzará alrededor de \$ 6 mil millones. Y que "priorizar este presupuesto... es totalmente viable", dijo en entrevista del 2 de febrero.

Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal, considera que más allá de la tendencia ideológica del presidente electo, el próximo régimen tendrá que poner en orden las finanzas públicas: "El Gobierno necesita \$ 3.000 millones para sus gastos y para amortizar deudas, pero solamente tiene ingresos por \$ 1.400 millones... Lo que falta lo cubre con endeudamiento", afirma.

El problema de la deuda se centra, más que del monto total, en lo que pesa en el presupuesto anual, dice Acosta. En 2016 se pagaron \$ 11.642 millones (el 12,1% del PIB) por servicio de deuda (pago de intereses y capital). En tanto que para salud y educación se destinaron en conjunto \$ 6.787 millones (el 7,1% del PIB), según el reporte de este analista.

A decir de Diego Borja, expresidente del Banco Central del Ecuador, este esquema de gastos frente a los ingresos no tiene asidero debido a que las previsiones de los precios del petróleo no son muy alentadoras: "Según los entendidos en materia petrolera, (el costo del barril) no lo colocan en los próximos dos años por encima de los \$ 64, \$ 65 para el WTI (crudo referencial que se produce en Texas, EE.UU.), que implica menos de \$ 60 para el caso del petróleo ecuatoriano", precisa.

Es una realidad que en los hogares se evidencia con la percepción de que hay menores ingresos, como el caso de Pablo Medina, quien a sus 71 años vive del reciclaje de botellas con lo que llega a reunir unos \$ 80 al mes. Hace nueve años trabajaba como conserje en una escuela fiscal, pero era contratado con el aporte de los padres, que fue eliminado. Desde entonces está sin empleo. Él vive en Monte Sinaí, en Guayaquil, y aspira al bono de \$ 100.

Para Borja, la clave está en hacer sostenible esta inversión social en el tiempo para que este grupo humano, que en las cifras oficiales ha salido de la pobreza, se sume a la clase media ya de forma consolidada y no dependa de los bonos: "Es necesario que esa población pueda tener sostenibilidad generando su propio ingreso a través de un empleo adecuado".

Manuel González Astudillo, profesor de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Espol, ve obstáculos en la concreción de ciertas políticas de transferencia directa y de mantenimiento de subsidios, los que por ley deben financiarse con ingresos permanentes como la recaudación de impuestos.

Para González, será muy difícil que Moreno haga lo que el Gobierno saliente ha realizado: "Entre el 2015 y el 2016, los ingresos tributarios (impuestos) disminuyeron en alrededor del 12%, lo que llevó asociada una disminución en las transferencias corrientes del orden del 17%. Sin la perspectiva de mayores ingresos tributarios por la disminución del IVA del 14% al 12% por ley, el fin de las salvaguardias, y la actividad económica de la que no se vislumbra recuperación, es muy difícil pensar en un escenario en el que las transferencias corrientes puedan incrementarse ya que no hay recursos que las puedan financiar". (1)



Un informe del MIES indica que "el bono en algunos casos representa entre el 40% y 50% del ingreso familiar"